



SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL

Medellín, catorce (14) de julio de dos mil veintidós (2022)

Demandante: EDWAR PESTAÑA PEREA
Demandado: CONALTURA S.A.
Llama en garantía: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Radicado: 05360 31 05 001 2021 00204 01
Decisión: A-172

DECISIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA

En la fecha indicada, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Primera de Decisión Laboral, integrada por los Magistrados JOHN JAIRO ACOSTA PÉREZ quien obra en éste acto en calidad de ponente, FRANCISCO ARANGO TORRES y JAIME ALBERTO ARISTIZÁBAL GÓMEZ, procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la apoderada de SEGUROS DEL ESTADO S.A., en contra del auto proferido por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Itagüí el día 23 de marzo de 2022 mediante el cual se tuvo por no contestada la demanda y el propio llamamiento en garantía por parte de dicha entidad.

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, la presente decisión se profiere mediante auto escrito, aprobado previamente por los integrantes de la Sala.

A N T E C E D E N T E S

En el proceso de la referencia, el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Itagüí, mediante auto del 23 de marzo de 2022, dispuso tener por no contestada la demanda y el llamamiento en garantía por parte de SEGUROS DEL ESTADO S.A., ante su presentación el día 7 de marzo

de 2022, cuando el término para ese efecto precluía el 4 de marzo del mismo año, indicando en consecuencia que tal situación se tendría como indicio grave en su contra según lo previsto en el parágrafo 2º del artículo 31 del C.P.T. y de la S.S.

Inconforme con lo decidido, la apoderada judicial de SEGUROS DEL ESTADO S.A. interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación, o que se realice control de legalidad declarando la nulidad de lo actuado, indicando que no existe constancia acerca de la notificación que se dice fue efectuada el 15 de febrero de 2022, así como tampoco acuse de recibido del correo electrónico ese mismo día en cumplimiento de lo establecido por la Corte Constitucional en sentencia C-420 de 2020, situaciones que impiden darle validez al intento de notificación, debiéndose tener como tal el 25 de febrero cuando se le permitió el acceso al expediente digital. De otro lado, considera que ese 15 de febrero no podía realizarse la notificación ya que aún estaba en ejecutoria el auto del 11 de febrero mediante el cual el Despacho decide no tener por notificada a SEGUROS DEL ESTADO por cuanto la parte demandante no cumplió con la remisión de la demanda y sus respectivos anexos.

El Juzgado mantuvo su decisión y concedió el recurso de apelación que había sido interpuesto subsidiariamente.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN:

Dentro del término concedido a cada una de las partes, la apoderada de la demandante presentó alegatos de conclusión solicitando se confirme la decisión de primera instancia y se condene a la recurrente al pago de las costas por la decisión desfavorable del recurso. Sostiene que debe entenderse surtida la notificación de conformidad con lo establecido en el Decreto 806 de 2020 y la sentencia C-420 del mismo año, cuando el destinatario del mensaje manifieste haberlo recibido o cuando mediante algún sistema se certifique que el correo

remitido efectivamente fue abierto por su destinatario, lo que en este caso ocurrió el mismo 15 de febrero de 2022 según lo informa el despacho, de manera que el término para contestar la demanda vencía el 4 de marzo y en esas condiciones la contestación fue presentada de manera extemporánea.

Por su parte, la apoderada de SEGUROS DEL ESTADO hizo uso de su oportunidad legal indicando que el despacho reconoce no haber dejado constancia de la notificación personal realizada el 15 de febrero de 2022 y haber procedido con el trámite cuando la decisión del 11 de febrero no había cobrado ejecutoria. Agrega que el uso de las tecnologías no puede implicar una disminución de las garantías procesales de las partes a las que debe ceñirse el Juez en sus actuaciones e insiste que la publicidad no se garantiza con la notificación personal, sino con la incorporación del documento que contiene dicho acto o al menos una constancia secretarial que de fe de la misma.

CONSIDERACIONES:

Según viene de verse, la inconformidad planteada por la llamada en garantía SEGUROS DEL ESTADO S.A., tiene que ver con la decisión del Juzgado Primero Laboral del Circuito de Itagüí de tener por no contestado el llamamiento en garantía que hizo la sociedad CONALTURA S.A., así como la propia demanda interpuesta por la señora MARGARITA MARÍA MARTÍNEZ RESTREPO, por haberse presentado por fuera del término legalmente establecido.

Antes de proceder con el análisis de la normatividad que regula la situación y lo que sugiere la entidad, es importante hacer un breve recuento de lo que hasta ahora ha acontecido.

i) Por auto del 2 de agosto de 2021 el Despacho de primera instancia dispuso admitir la demanda y ordenar la notificación en los términos del artículo 8º del Decreto 806 de 2020.

ii) La demandada CONALTURA S.A. allegó dentro del término legalmente concedido la contestación a la demanda, llamando en garantía a la sociedad SEGUROS DEL ESTADO S.A.

iii) Ese llamamiento fue admitido por el Juzgado mediante auto del 23 de septiembre de 2021, momento en el que se requirió a la demandada para que procediera con la respectiva notificación, igualmente con fundamento en el Decreto 806 de 2020.

iv) CONALTURA S.A. intentó el trámite de notificación ordenado, pero al no haberse acreditado el cumplimiento de las exigencias legales al omitir el envío de la demanda y sus anexos, el Juzgado, mediante auto del 11 de febrero de 2022, notificado por Estados del 14 de febrero de ese mismo año, ordenó realizar dicha notificación por secretaría.

v) La notificación se cumplió el 15 de febrero a la dirección de correo electrónico juridico@segurosdelestado.com, con la remisión del link para acceder al expediente digital.

Tal y como lo tiene establecido el Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social en su artículo 74, norma que fuera modificada por el artículo 38 de la ley 712 de 2001, *"Admitida la demanda, el juez ordenará que se dé traslado de ella al demandado o demandados para que la contesten y al Agente del Ministerio Público si fuere el caso, por un término común de diez (10) días, traslado que se hará entregando copia del libelo a los demandados."*

Por su parte, con la expedición del Decreto Legislativo 806 de 2020, *"Por el cual se adoptan medidas para implementar las tecnologías de*

la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica", se estableció, respecto a las notificaciones personales, lo siguiente;

"ARTÍCULO 8. Notificaciones personales. Las notificaciones que deban hacerse personalmente también podrán efectuarse con el envío de la providencia respectiva como mensaje de datos a la dirección electrónica o sitio que suministre el interesado en que se realice la notificación, sin necesidad del envío de previa citación o aviso físico o virtual. Los anexos que deban entregarse para un traslado se enviarán por el mismo medio.

El interesado afirmará bajo la gravedad del juramento, que se entenderá prestado con la petición, que la dirección electrónica o sitio suministrado corresponde al utilizado por la persona a notificar, informará la forma como la obtuvo y allegará las evidencias correspondientes, particularmente las comunicaciones remitidas a la persona por notificar.

La notificación personal se entenderá realizada una vez transcurridos dos días hábiles siguientes al envío del mensaje y los términos empezarán a correr a partir del día siguiente al de la notificación."

En las condiciones descritas por el decreto 806 de 2020, la notificación a la demandada se podía entender surtida pasados dos días del envío del mensaje al demandado al correo electrónico que hubiere sido informado previamente, que en este caso corresponde a juridico@segurosdeleestado.com.

En el presente caso, ese procedimiento se realizó ajustado a lo que tiene establecido el Código General del Proceso en su artículo 291 cuando de notificaciones por correo electrónico se trata; según esa norma, no basta simplemente con que se remita el mensaje al correo electrónico correspondiente, sino que es necesario que el destinatario

acuse recibido para poder entender que la notificación efectivamente se ha realizado.

Es en ese sentido que se ha pronunciado la Corte Constitucional en sentencia C-420 de 2020, declarando la exequibilidad condicionada de ese inciso tercero del artículo 8º del Decreto 806 del mismo año con fundamento en lo siguiente:

“1. En atención a estas consideraciones, le corresponde decidir a la Sala si el artículo 8º del Decreto Legislativo 806 de 2020 vulnera la garantía de publicidad, integrada al derecho fundamental al debido proceso, al permitir que la notificación del auto admisorio se remita al correo electrónico o sitio suministrado por la parte demandante o identificado mediante las consultas autorizadas en el parágrafo del artículo.

(...) En principio, la Corte encuentra que la notificación del auto admisorio de la demanda mediante la remisión de un correo electrónico a la parte interesada es una medida plausible para lograr que esta conozca la existencia de un proceso en su contra y ejerza aquellos derechos.

(...)

El Consejo de Estado¹, la Corte Suprema de Justicia² y la Corte Constitucional³ coinciden en afirmar que la notificación de las providencias judiciales y los actos administrativos no se entiende surtida solo con el envío de la comunicación mediante la cual se notifica (sea cual fuere el medio elegido para el efecto) sino que resulta indispensable comprobar que el notificado recibió efectivamente tal comunicación. Así, la garantía de publicidad de las providencias solo podrá tenerse por satisfecha con la demostración de que la notificación ha sido recibida con éxito por su destinatario.

El inciso 3 del artículo 8º del Decreto Legislativo 806 de 2020 prevé que “la notificación personal se entenderá realizada una vez transcurridos dos días hábiles siguientes al envío del mensaje y los términos empezarán a correr a partir del día siguiente al de la notificación”. Una regla semejante se contiene en el parágrafo del artículo 9º, según el cual,

¹ Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto del 4 de abril de 2017, rad. 11001-03-06-000-2016-00210-00(2316).

² Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil y Agraria, sentencia de 11 de octubre de 2019, Rad. 0500022130002019-00115-01, STC13993-2019.

³ Sentencias T-225 1993, C-096 de 2001, C-1114 de 2003 y Auto 132 de 2007.

“Cuando una parte acredite haber enviado un escrito del cual deba correrse traslado a los demás sujetos procesales, mediante la remisión de la copia por un canal digital, se prescindirá del traslado por secretaría, el cual se entenderá realizado a los dos (2) días hábiles siguientes al del envío del mensaje y el término respectivo empezará a correr a partir del día siguiente”. Al ser consultado sobre las razones que motivaron estos apartados normativos, el Gobierno nacional informó que la medida tiene por objeto conceder un término razonable para que los sujetos procesales puedan revisar su bandeja de entrada, partiendo del reconocimiento de que no todas las personas tienen acceso permanente a Internet⁴. De esta respuesta no se sigue que, al adoptar la medida, el Gobierno pretendiera desconocer el precedente descrito relativo a la validez de la notificación a partir de su recepción por el destinatario –en el caso de la primera disposición– o del traslado de que trata la segunda disposición, que no de su envío.

No obstante, la Corte encuentra que, tal como fue adoptada la disposición, es posible interpretar que el hito para calcular el inicio de los términos de ejecutoria de la decisión notificada o del traslado no corresponde a la fecha de recepción del mensaje en el correo electrónico de destino, sino a la fecha de envío. Esta interpretación implicaría admitir que, aun en los eventos en que el mensaje no haya sido efectivamente recibido en el correo de destino, la notificación o el traslado se tendría por surtido por el solo hecho de haber transcurrido dos días desde su envío. Una interpretación en este sentido desconoce la garantía constitucional de publicidad y por lo mismo contradice la Constitución.

Aunque el legislador cuenta con una amplia libertad para simplificar el régimen de notificaciones procesales y traslados mediante la incorporación de las TIC al quehacer judicial, es necesario precaver que en aras de esta simplificación se admitan interpretaciones que desconozcan la teleología de las notificaciones, esto es la garantía de publicidad integrada al derecho al debido proceso. En consecuencia, la Corte declarará la exequibilidad condicionada del inciso 3 del artículo 8° y del párrafo del artículo 9° del Decreto Legislativo sub examine en el entendido de que el término de dos (02) días allí dispuesto empezará a contarse cuando el iniciador recepcione acuse de recibo o se pueda por otro medio constatar el acceso del destinatario al mensaje. A juicio de la Sala, este condicionamiento (i) elimina la interpretación de la medida que desconoce la garantía de publicidad, (ii) armoniza las disposiciones examinadas con la regulación existente en materia de notificaciones personales mediante

⁴ Intervención de la Secretaría Jurídica de la Presidencia, escrito del 1 de julio de 2020, pág. 84.

correo electrónico prevista en los artículos 291 y 612 del CGP y, por último, (iii) orienta la aplicación del remedio de nulidad previsto en el artículo 8º, en tanto provee a los jueces mayores elementos de juicio para valorar su ocurrencia.”

Contrario a lo que se sostiene a través del recurso de apelación según el cual no se ha realizado la notificación, en el expediente virtual está acreditado, no solo el envío y la recepción del mensaje a través de correo electrónico, sino también la lectura del mismo, con lo que se cumplen las condiciones del Decreto 806 de 2020 y el artículo 291 del Código General del Proceso, pues el Juzgado dejó la constancia respectiva, adjuntando la impresión del mensaje de datos como lo exige la ley.

Esa comunicación fue remitida desde la cuenta institucional del Despacho j01lctoitagui@cendoj.ramajudicial.gov.co a la cuenta registrada por la empresa juridico@segurosdelestado.com el día 15 de febrero de 2022 a la 1:12PM. Allí se indicó como asunto “NOTIFICACIÓN LLAMADO EN GTIA RAD 05360310500120210020400” y se informó al destinatario que “... Conforme al artículo 8º del decreto 806 de 2020, le notificamos mediante medio electrónico el llamamiento en garantía en la demanda con radicado 05360310500120210020400 que cursa en este despacho. En el siguiente link podrá acceder al expediente digital...”.

Además de ello, existe constancia del servidor acerca de la entrega del mensaje al destinatario de ese mismo día a la 1.13PM y de lectura a la 1:38PM, lo que lleva a concluir que la empresa sí fue informada y notificada del auto admisorio de la demanda y por ende los términos para su contestación comenzaron a contar, presentándose el escrito de contestación por fuera del término correspondiente y dando lugar a que se tuviera por no contestada la demanda.

Debe decirse, además, que el término para contestar la demanda lo determina la notificación en la forma antes vista y el momento preciso

en el que la demandada conoce de la existencia del proceso, lo que se cumple perfectamente con aquella remisión del mensaje de datos, sin que en tenga incidencia alguna que las respectivas constancias hayan sido incluidas oportunamente o no en el expediente digital. En ese sentido, el artículo 8º del Decreto 806 es claro en indicar que *"La notificación personal se entenderá realizada una vez transcurridos dos días hábiles siguientes al envío del mensaje y los términos empezarán a correr a partir del día siguiente al de la notificación"*, sin que en parte alguna se condicione su contabilización al hecho de tener la constancia en el expediente.

De otro lado, tampoco es admisible el argumento de la recurrente según el cual no podía surtir la notificación en esa fecha por cuanto había un auto, el del 11 de febrero de 2022, que no había cobrado ejecutoria, lo que vulnera las garantías procesales y derechos como el debido proceso. La Sala considera que ninguna garantía procesal se le vulnera a SEGUROS DEL ESTADO S.A. con la decisión del Juzgado de tramitar por su cuenta la respectiva notificación un día después del auto que había señalado que el trámite realizado por la demandada CONALTURA S.A. adolecía de errores.

Todo lo contrario, con ello se garantiza la celeridad del proceso y el efectivo acceso a la administración de justicia de las partes, más cuando el artículo 64 el Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social tiene establecido que *"Contra los autos de sustanciación no se admitirá recurso alguno..."*.

En consecuencia, al estar acreditadas que la notificación a la llamada en garantía se realizó en debida forma y que la contestación fue presentada por fuera del término concedido, la decisión de primera instancia en cuanto dispuso dar por no contestada la demanda y el llamamiento en garantía por SEGUROS DEL ESTADO S.A. será confirmada.

Sin costas en esta instancia.

D E C I S I Ó N

Por lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Primera de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, **CONFIRMA** el auto proferido por el Juzgado 1º Laboral del Circuito de Itagüí el día 23 de marzo de 2022.

Sin costas en esta instancia.

Se notifica lo resuelto por ESTADOS y se ordena devolver el expediente al Juzgado de origen.

**EL SUSCRITO SECRETARIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR
DE MEDELLÍN – SALA LABORAL - HACE CONSTAR**

Que la presente providencia se notificó por estados N° 123
del 15 de julio de 2022

Consultable aquí:
<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/130>

Firmado Por:

John Jairo Acosta Perez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Jaime Alberto Aristizabal Gomez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Francisco Arango Torres
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **72f9948e6fc7f9e4fe71ac0503ceb66bcb76ca1703a564c313cdf562724322e7**

Documento generado en 14/07/2022 11:37:10 AM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>